ECONOMÍA / POLÍTICA

En 20 provincias hay menos de 2 cotizantes por pensionista pese al récord de empleo

DIFÍCIL EQUILIBRIO/ Aunque las cifras de afiliación a la Seguridad Social se encuentran cerca de cotas históricas, con 21,38 millones de cotizantes a julio, en casi el 40% de las provincias españolas hay menos de dos ocupados por pensionista.

J. Díaz. Madrid

El sistema público de pensiones se debate desde hace años en un precario equilibrio entre unos ingresos que ya son insuficientes y unos gastos que no paran de crecer y que aumentarán con mayor fuerza en los próximos años por efecto del envejecimiento demográfico y la jubilación de la generación del *Baby Boom*. Después de dejar atrás el *shock* del Covid, la resiliencia mostrada por el mercado laboral durante la guerra en Ucrania y la crisis inflacionista ha permitido aupar y mantener las cifras de afiliación a la Seguridad Social en cotas históricas, por encima de los 21 millones de ocupados, pese a que empiezan a aflorar síntomas de cansancio. La buena marcha del empleo hasta ahora ha permitido mejorar la ratio de cotizantes por pensionista, que ha pasado de 1,97 en 2013 a 2,3 en julio de este año.

Sin embargo, esa mejora apenas supone una tirita para un sistema que, según los expertos, precisa cirugía. Y es que si bien el mercado de trabajo ha ganado 4,6 millones de cotizantes en la última década, hasta situarse en los 21,38 millones de afiliados medios en julio, el número de pensiones y pensionistas también ha crecido con fuerza: hasta los 10,2 millones de prestaciones (hay personas que cobran más de una pensión), 0,9 millones más que en 2014, y 9,2 millones de pensionistas, casi 0,8 millones más que hace diez años, según se desprende de los datos de la Seguridad Social.

Además, si se contabilizan todas las prestaciones que afronta el sistema, la ratio de cotizante por pensión se reduce a 2,1, evidenciando que la frontera entre el equilibrio y el desequilibrio es muy delgada. Y ello sin olvidar que la nómina de este nutrido y creciente colectivo, ligada en los últimos años exclusivamente al IPC, ha crecido exponencialmente, al pasar de 6.867 millones de euros mensuales en 2010 a 12.828 millones en agosto pasado, casi el doble (+86%), sobrecargando la capacidad del sistema y obligando a la Seguridad Social a recurrir a préstamos del Estado para afrontar el abono de las pagas extras de los jubilados. El resultado es una deuda superior a los 116.000 millones en la actualidad.

Con este telón de fondo y pese a las cifras récord de afiliación, la ratio cotizante/pensionista sigue cogida con pinzas, maquillada por los territorios con mayor poderío laboral, como Madrid, Baleares o Cataluña, que elevan la media, porque en 20 de las 52 provincias españolas (incluyendo Ceuta y Melilla) la proporción sigue siendo inferior a dos cotizantes por cada pensionista. Es una ratio peligrosa, porque, como advierten los expertos, el equilibrio en los sistemas de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores en activo sufragan las prestaciones de los pensionistas, es difícil de sostener cuando la relación entre afiliados y pensionistas es inferior a 2, situación que se produce en casi el 40% de las provincias españolas. Según recuerda el Instituto Santalucía, serían necesarios al menos 2,6 afiliados por pensionista "para que desapareciera el actual déficit contributivo de la Seguridad Social". Esto es, unos 3 millones de afiliados más que los actuales.

Envejecimiento

Ourense, Lugo, León, Asturias y Zamora, que figuran entre las provincias con una población más envejecida, no solo se sitúan muy por debajo de esa ratio necesaria, sino que ni siquiera llegan a 1,5 cotizantes por pensionista. Ourense, con una proporción de 1,1, ostenta el dudoso honor de ser la provincia en la que hay casi tantos pensionistas como trabajadores en activo: 127.964 afiliados frente 95.066 jubilados. Otros territorios se sitúan peligrosamente cerca de esa ratio, como Lugo y León, donde apenas hay 1,3 ocupados por cada pensionista, mientras que en Asturias y Zamora la proporción es de 1,4. Esta situación ilustra la gravedad del problema del envejecimiento demográfico sin suficiente relevo laboral.

En un informe reciente, la Fundación BBVA alertaba de que, según las previsiones, la tasa de dependencia demográfica (proporción de personas que dependen económicamente de la población en edad de trabajar) pasaría del 31% que rondaba en 2022 a casi el 54% en 2050, con lo que harían falta más de 6 millones de afiliados adicionales para lograr el déficit cero en el sistema de pensiones contributivas.

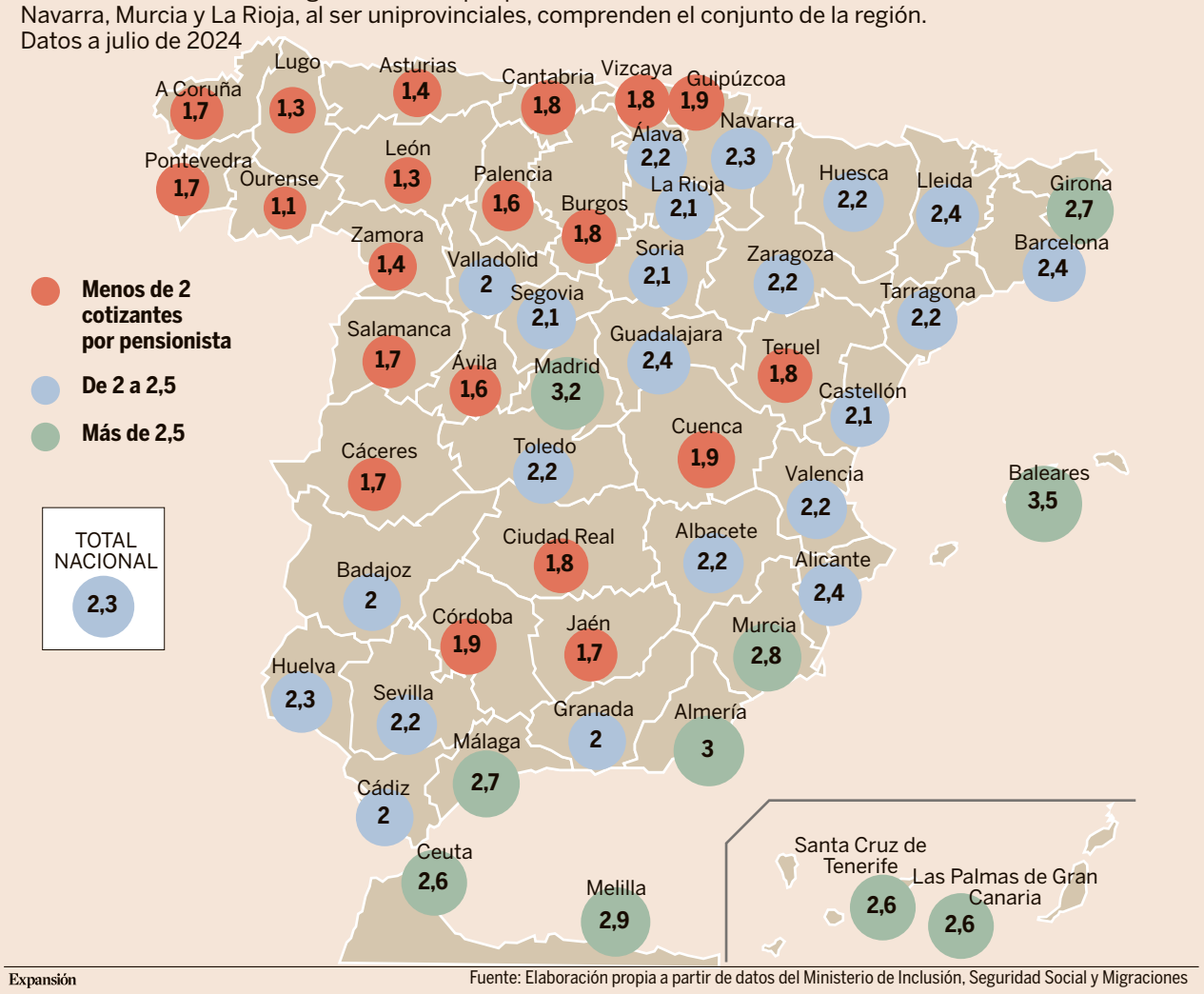
En el otro lado de la balanza, entre las provincias que elevan la ratio media sobresalen Baleares, con 3,5 afiliados por cada pensionista; Madrid, con una proporción de 3,2, y Almería, con 3 ocupados por cada retirado. Lejos de esa proporción está Barcelona, con 2,4, pese al tamaño de su mercado, uno de los mayores junto al de Madrid, que cuenta con 3,68 millones de cotizantes frente a los 2,86 millones de la Ciudad Condal. Mientras que los afiliados madrileños sostienen a 1,14 millones de pensionistas, los barceloneses sustentan a 1,17 millones.

Los 21,3 millones de afiliados soportan 9,2 millones de pensionistas con 10,2 millones de pensiones

Baleares y Madrid tienen las ratios más altas, con 3,5 y 3,2 cotizantes por pensionista

COTIZANTES POR CADA PENSIONISTA EN LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS

Número de afiliados a la Seguridad Social por pensionista. Los datos de Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, al ser uniprovinciales, comprenden el conjunto de la región. Datos a julio de 2024



Expansión

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Reformas paliativas, pero insuficientes

Con la jubilación de las primeras cohortes de la generación del *Baby Boom* ya en marcha (los primeros cumplieron 65 años en 2023), que, según las estimaciones, llevarán los 9,2 millones de pensionistas actuales hasta el entorno de los 13 millones en 2035, el Gobierno ha pisado el acelerador para intentar mitigar la avalancha de jubilaciones y paliar su impacto sobre el gasto. Así, ha reforzado los incentivos para retrasar el retiro más allá de la edad ordinaria, ha hecho compatible el cobro de salario y pensión, y premiará a quienes coticen de forma ininterrupida, entre otros estímulos. En lo que atañe a los ingresos y ante el imparable aumento del gasto, su principal receta ha sido la progresiva subida de las cotizaciones sociales para atenuar los males de un sistema deficitario (el déficit real de las pensiones contributivas rozó los 56.000 millones en 2023, según Fedea). Sin embargo, aunque estas medidas podrían, de un lado, ayudar a contener el gasto, y de otro, inyectar algo de oxígeno a los ingresos, organismos como el Banco de España consideran que son insuficientes para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema. Primero, porque el alcance del ahorro derivado de las jubilaciones demoradas será limitado. Y segundo, porque el alza de las cotizaciones puede acabar lastrando la creación de empleo, con la consiguiente merma de contribuyentes al sistema.

Editorial / Página 2